

685

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA.

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado: 54-001-23-33-000-2013-00392-00
Actor: CORPONOR
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados México S.A.S.- I.C.A. de México S.A.S., Termotécnica Coindustrial S.A., ECOPETROL S.A.
Medio de Control: Reparación Directa.

Visto el informe secretarial que antecede (folio 684), procede el despacho a correr traslado a **ECOPETROL S.A.** y a **CORPONOR** del escrito presentado por el Grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en Cabeza de la Profesora Elsa Astrid Ulloa Cubillos (folios 682 a 683), mediante el cual dicha entidad, la citada profesora refiere jamás haber realizado ni tener la experticia ella y que el Grupo de Investigación que dirige son estudiantes de pregrado y postgrado, y no investigan temas relacionados, ni tienen experticia ni los conocimientos para determinar y cuantificar perjuicios de todo orden por el derrame de petróleo.

Lo anterior con el fin de que **ECOPETROL S.A.** Y **CORPONOR**, se pronuncien si tienen conocimiento de otra entidad pública o privada que pueda rendir el experticio, encargado al instituto en mención.

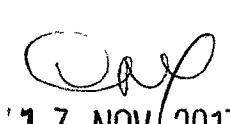
En virtud a lo expuesto, este despacho

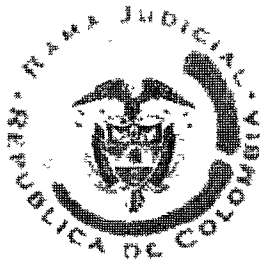
RESUELVE:

PRIMERO: Córrase traslado por el termino de cinco (5) días, a **ECOPETROL S.A.** y a **CORPONOR**, del oficio presentado por por el Grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en Cabeza de la Profesora Elsa Astrid Ulloa Cubillos, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE,


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


17 NOV 2017
Estado No. 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA


San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Medio de control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Proceso:	54-001-23-33-000-2012-00119-00
Demandante:	Luis Cesar Carrasco Villamizar
Demandada:	Universidad de Pamplona

Habiendo sido realizada de manera correcta la liquidación de costas por parte de la Secretaría de esta Corporación, fechada el diez (10) de octubre del presente año, se procede a darle aprobación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


Estado No 194
17 NOV 2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 54-001-23-33-000-2014-00114-00
Demandante: CI FLEXCOLVEN LTDA.
Demandado: Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cúcuta, UAE DIAN
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Visto el informe secretarial¹ que antecede y una vez, realizado el estudio del expediente de la referencia, se advierte que el perito contador designado mediante auto de fecha 12 de febrero de 2016², no se pronunció respecto de la aceptación o no del cargo para el cual fue nombrado, toda vez que no tuvo conocimiento de tal designación en su momento, no obstante a la fecha se tiene que la lista de auxiliares de la justicia de donde fue tomado su nombre, así como el siguiente, no se encuentra vigente, ante lo cual, conforme lo prevén los artículos 218 del C.P.A.C.A. y 234 del C.G.P., se dispone oficiar al Director del Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Norte de Santander a efectos designe el funcionario idóneo para que rinda el dictamen pericial decretado en la audiencia inicial celebrada el día 11 de mayo de 2015, según acta de la misma que obra a folios 188 al 191.

Por lo anterior se deja sin efectos el auto de fecha 27 de julio de 2017.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

17 NOV 2017
Estado No. 194

¹ Ver folio 235

² Ver folio 227



65

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Radicado: 54-001-23-33-000-2015-00425-00
Actor: Ferney Bohórquez Flechas
Demandado: Dirección General de Sanidad Militar por extensión a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – Batallón de
Infantería N° 13 “GR Custodio García Rovira”
Acción: Incidente de Desacato en Tutela

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera en proveído de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual confirmó la providencia que impuso sanción por desacato a la tutela de la referencia.

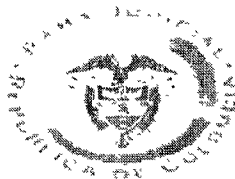
Así mismo y efectos de garantizar el cumplimiento de la orden impartida oficiase a la Dirección de Administración Judicial con el objeto adelantar el procedimiento de cobro coactivo pertinente, informándosele todos los datos del presente trámite, remitiéndosele copia de las providencias que impusieron la sanción.

Una vez cumplido lo anterior, **ARCHÍVESE** el expediente previas anotaciones secretariales de rigor.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE,

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

17 NOV 2017
Estado No. 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 54-001-23-33-000-2016-00098-00
Demandante: Carlos Arturo Álzate Vásquez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

De conformidad con lo reglado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE CITA** a las partes, a sus apoderados, al señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de llevar a cabo la **AUDIENCIA INICIAL** de que trata la norma en cita, para lo cual se señala como fecha el día martes veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

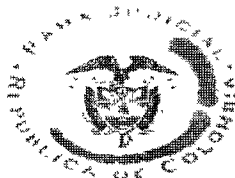
Reconózcase personería para actuar al profesional del derecho Jesús Andrés Sierra Gamboa, como apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en los términos y para los fines del memorial poder conferido.

Por Secretaría, vía correo electrónico, cítese a los Doctores Edgar Enrique Bernal Jauregui y Carlos Mario Peña Díaz que conforman la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para la celebración de la audiencia anotada anteriormente.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


17 NOV 2017
Estado No. 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 54-001-23-33-000-2016-00105-00
Demandante: SOCAR Ingeniería Ltda.
Demandado: ECOPETROL S.A.
Medio de control: Controversias Contractuales

De conformidad con lo reglado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE CITA** a las partes, a sus apoderados, al señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de llevar a cabo la **AUDIENCIA INICIAL** de que trata la norma en cita, para lo cual se señala como fecha el día martes veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018) a las tres de la tarde (3:00 p.m.).

Reconózcase personería para actuar a la profesional del derecho Víctor Manuel Pérez Alvarado, como apoderado de Ecopetrol S.A., en los términos y para los fines del memorial poder conferido.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

17 NOV 2017
Estado No. 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NORTE DE SANTANDER
Magistrado Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Demandante: Adolfo León Núñez Bonilla
Demandado: Municipio San José de Cúcuta y Metrovivienda Cúcuta.
Radicado: 54-001-23-33-000-2016-00324-00


Medio de control: Reparación Directa.

En atención a la reforma de la demanda presentada por la parte demandante vista a folio 39 a 46 y 83 a 88, se advierte por el Despacho que la misma cumple con las reglas señaladas en el artículo 173 del C.P.A.C.A., en virtud de lo anterior **ADMÍTASE** la reforma de la demanda y **CÓRRASE TRASLADO** a la parte demandada, para los efectos y en los términos de la norma en cita.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado



17 NOV 2017
Estado No 194



81

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

RADICADO:	54-001-23-33-000-2017-00685-00
ACCIONANTE:	HÉCTOR TRINIDAD CASTILLO PARADA
DEMANDADO:	UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Seria del caso proceder a verificar el cumplimiento de los presupuestos formales y sustanciales legales que debe reunir la demanda de la referencia para efectos de ser admitida, sino se advirtiera que el conocimiento de la misma no corresponde a este Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual procederán a exponerse, las razones de derecho que conllevan a tal conclusión.

1. ANTECEDENTES

El señor HÉCTOR TRINIDAD CASTILLO PARADA, actuando en nombre propio, mediante apoderado, presenta demanda en contra de la UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, deprecando la nulidad de las resoluciones **RDP 020013 del 21 de mayo de 2015** y **RDP 035415 del 28 de agosto de 2015**, donde se deniega la solicitud de reliquidación de su pensión de vejez, así como el reconocimiento y pago de los retroactivos correspondientes a la diferencia entre el mayor valor resultante de la reliquidación y el reajuste de la mesada pensional, además del pago de los intereses moratorios correspondientes

2. CONSIDERACIONES

La importancia de estimar razonadamente la cuantía del proceso adquiere especial importancia para la definición de competencias entre los Juzgados y Tribunales Administrativos, en razón a que de ese razonamiento que debe hacer la parte demandante en el escrito de demanda, depende la determinación de la competencia. Al respecto, se considera que tal requisito de la demanda de estimar razonadamente la cuantía busca impedir que el demandante de forma caprichosa determine este factor y así pueda escoger a su arbitrio, el juez que a su juicio debe conocer el asunto en primera instancia.

La Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, establece la competencia de los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos

()

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes ()”

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos

()

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes ()”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

“Competencia por razón de la cuantía Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen () Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor” () “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Se resalta)

De acuerdo con la normativa transcrita, la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Administrativo para asumir el conocimiento de la demanda, se establece conforme el valor de la pretensión mayor al momento de su presentación, esto es, la pretensión más alta debe exceder el valor de los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella y la estimación de perjuicios morales, a menos que éstos sean los únicos reclamados.

Descendiendo al caso concreto, visto el memorial de subsanación de la demanda y estimación de la cuantía (fl. 72 -73), se observa que el apoderado de la parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, pretende se condene a la entidad demandada, al reconocimiento y pago de \$42 209.538 de pesos.

Como muestra la normativa citada, la cuantía se debe determinar por el valor mayor de la pretensión, y para el caso de pensiones, los valores a tener en cuenta para su cómputo no deben superar los tres (3) años (36 meses), desde cuanto se causaron y hasta la radicación de la demanda.

En ese orden de ideas, atendiendo a que la pretensión de mayor valor deprecada concierne a la **diferencia** entre la mesada pensional reconocida por la entidad demandada y el monto de la mesada que la parte demandante considera tener derecho con sus respectivos ajustes, se procede a sustraer el valor de la mesada actual que recibe el demandante, esto es, \$1.302.612.00, de la mesada pensional que aspira sea reconocida de \$2.307.600.93, de lo que resulta una diferencia de \$1.004.988.93, que multiplicada por 36 meses, arroja un valor total de \$36.179.601.48, no alcanzándose a superar el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2017¹, por ende, no se habilita la competencia para que esta Corporación asuma el conocimiento en primera instancia en el asunto de la referencia.

¹ Para el año 2017 equivale a \$36'885 850 00

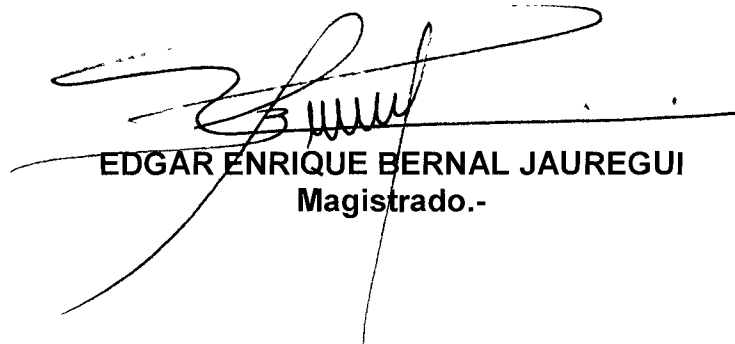
Así las cosas, concluye el Despacho, sin lugar a hesitación, que el presente proceso deberá ser devuelto al **Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta**, por cuanto a éste despacho judicial le fue inicialmente repartido el presente asunto, quién, en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

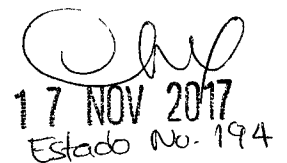
RESUELVE

PRIMERO: Previas las anotaciones a que haya lugar, **DEVOLVER** el expediente al **Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta**, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

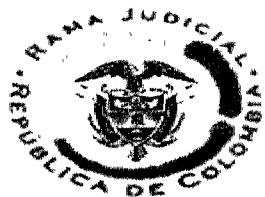
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-



17 NOV 2017
Estado No. 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 54-001-33-33-002-2014-01159-01

Demandante: Rogelio Gómez Carrillo

Demandados: Departamento Norte de Santander

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

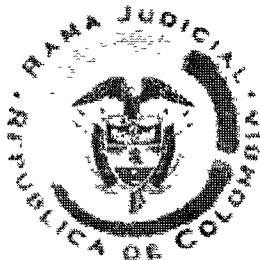
Sería del caso correr traslado a las partes para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión, sino advirtiera el Despacho que el pasado cinco (5) de octubre al admitir el recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandada, se señaló que la providencia recurrida correspondía a fecha diferente, ante lo cual se hace necesario aclarar que la sentencia apelada data del veintiocho (25) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); de igual manera no se hizo pronunciamiento sobre el recurso de apelación por adhesión interpuesto por la parte demandante, ante lo cual y de conformidad con el artículo 322 del Código General del proceso, se **ADMITE** el recurso de apelación mediante adhesión presentado por la parte demandante, contra la sentencia de la fecha en mención, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que concedió las pretensiones de la demanda.

Por secretaria notifíquese la admisión del recurso de apelación al Procurador 23 Judicial Delegado, de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 198 del CPACA. Para tal efecto téngase como dirección de buzón electrónico las informadas por los señores Procuradores Judiciales Delegados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

17 NOV 2017
Estado No 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Hernando Ayala Peñaranda

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado : 54-001-33-33-003-2017-00386-01
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante : Uriel Alexander Acevedo Urquijo y otros
Contra : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial
Asunto : Impedimento planteado por los Jueces Administrativos del Circuito

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 39), procede la Sala a decidir el impedimento planteado por el Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien estima además, que el impedimento comprende a todos los jueces administrativos del circuito de Cúcuta.

1. ANTECEDENTES

Los señores Uriel Alexander Acevedo Urquijo, Jaime Trillos Yáñez, Leidy Tatiana Peña, Julio Armando Ascanio Sánchez y Eder Hamilton Cobo Villareal, a través de apoderado judicial, interponen demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. DESAJCR17-1511 de 5 de abril de 2017 y DESAJCR17-1683 de 22 de mayo de 2017, mediante las cuales la Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta niega el reconocimiento de la inclusión como factor salarial de la bonificación judicial.

Como consecuencia de la nulidad y a título del restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la demandada, reconozca, reliquide y pague a los demandantes, la prestación laboral enunciada, contabilizando como factor salarial la Bonificación Judicial, desde el 1º de enero de 2013 a la fecha, y en las que en lo sucesivo se causen.

2. MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO

El Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta manifiesta, que se encuentra impedido para conocer del presente asunto, al advertir que está incurso en la causal establecida en el artículo 141 numeral 1º del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 (ver folio 36).

Fundamentan su impedimento, en que las pretensiones de la demanda se contraen a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó a los actores la reliquidación de las prestaciones laborales, contabilizando como factor salarial la bonificación judicial, prestación concebida a favor de los jueces de la República, escenario en que se encuentra el y los demás jueces administrativos del Circuito de Cúcuta, lo que constituye una razón suficiente para afirmar que les asiste un interés actual y directo en las resultas del proceso, configurándose de esta forma la causal de impedimento alegada.

3. CONSIDERACIONES

En el presente caso, el Juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta manifiesta, que él y los demás Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta, se encuentran incursos en la causal establecida en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

“1.Tener el Juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.”

Analizada la causal esgrimida junto con el argumento del impedimento manifestado, esta Sala de decisión lo considera fundado, toda vez, que como bien lo afirma el Juez Tercero Administrativo, tanto estos como los demás Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta poseen un interés en las resultas del caso objeto de controversia; toda vez que la presente demanda guarda similitud con sus condiciones como funcionarios públicos con las prestaciones sociales que se pretenden, sin que sea posible separar de tales consideraciones el propio interés por las resultas del proceso.

En razón de lo anterior se declarará fundado el impedimento manifestado por los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta, declarándolos separados del conocimiento del presente asunto. En consecuencia, y dando aplicación a lo previsto en el numeral 2º del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, se ordenará la remisión del expediente al Presidente de este Tribunal, a efectos de que se fije fecha y hora para efectuar el sorteo de un conjuez que asuma el conocimiento del presente asunto.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Oral No. 1 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

Radicado: 54-001-33-33-003-2017-00386-01
Auto Resuelve impedimento

RESUELVE

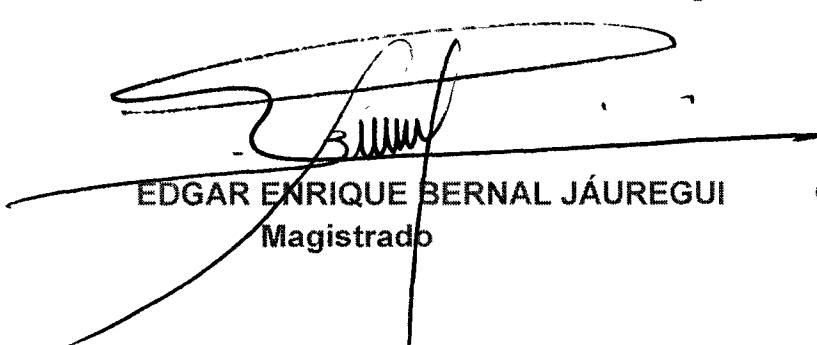
PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta. Por tal motivo se les declara separados del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: En consecuencia, una vez ejecutoriado el presente proveído, **remítase** el expediente al Presidente de este Tribunal, **a efectos de que señale fecha y hora para efectuar el sorteo de un conjuez que asuma el conocimiento del presente asunto.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

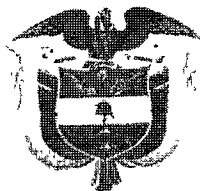
(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral N° 1 del 16 de noviembre de 2017)


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado


17 NOV/2017
Estado No 194



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, nueve (09) de noviembre del dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Ponente: **Carlos Mario Peña Díaz**

RADICADO: 54-001-33-33-004-2013-00299-01
ACCIONANTE: ANA YANETH MARTINEZ QUIROS Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

Procede la Sala de decisión a resolver sobre la concesión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por éste Tribunal el 17 de agosto de 2017 en segunda instancia.

I. CONSIDERACIONES

1.1.- El artículo 261 del CPACA señala que el recurso extraordinario de unificación debe ser interpuesto a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria. Así mismo, el artículo 257 de la ley 1437 del 2011 preceptúa sobre la procedencia, que el recurso extraordinario de unificación procede contra sentencias: i) Dictadas en única y segunda instancia por los Tribunales Administrativos.

1.2.- Adicionalmente, el artículo 257 en cita prescribe, que tratándose de aquellas sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda el monto fijado en dicha norma, que en el caso de procesos de reparación directa, corresponde a una suma igual o que exceda los 450 SMLMV al momento de la interposición del recurso.

1.3.- Estima la Sala, que el artículo establece las cuantías de los procesos exigidas para el recurso, precaviendo a interpretación de esta Sala, que cuando la sentencia ha sido concedida parcia o totalmente la cuantía se determina por la

condena impuesta; mientras que, cuando se han negado las pretensiones de la demanda, la cuantía se determina en su defecto por las pretensiones de la demanda y finalmente, prevé el artículo 263 del CPACA que cuando sea necesario tener el valor del interés para recurrir y éste no aparezca determinado, antes de resolver sobre la concesión del recurso, el ponente, dispondrá que aquel se justiprecie por un perito.

1.4.- En el caso *sub examine*, evidenciamos que la sentencia fue concedida parcialmente, de tal forma, que el asunto puesto a consideración de esta Sala, se encuadra dentro del supuesto según el cual, la cuantía se encuentra delimitada por la condena impuesta.

1.5.- Así las cosas, revisada la condena impuesta en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta el día 25 de agosto de 2015 y modificada por esta Corporación el día 17 de agosto de 2017, encontramos lo siguiente:

PERJUICIOS	CONDENA EN PESOS	EN SMLMV
Morales		180 SMLMV
Materiales	\$ 18.887.360,87	25.6 SMLMV
TOTAL		205,6 SMLMV

1.6.- Como vemos, aun cuando el recurso impetrado por la parte actora fue oportuno, pues la sentencia objeto del mismo quedó ejecutoriada el pasado 29 de agosto de 2017¹, no resulta procedente, teniendo en cuenta que la condena impuesta en la sentencia modificada por éste Tribunal no asciende a un monto igual o superior a 450 SMLMV que refiere el artículo 257 del CPACA. En efecto, según la verificación que hiciera la Sala, la condena arroja un monto de 205, 6 SMLMV, razón por la cual, se declarará improcedente del recurso presentado por el apoderado judicial de la parte actora.

1.7.- En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia promovido por la parte demandante contra la sentencia ejecutoriada el 29 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

SEGUNDO: Ejecutoriado el auto anterior, archívese el expediente previas anotaciones secretariales de rigor.


NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

(Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala de decisión No. 3 del 09 de noviembre de 2017)


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado.-


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado.-


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado.-


17 NOV 2017
Estado No. 194

¹ El recurso se interpone el 31 de agosto de 2017.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, catorce (14) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Sustanciador: Edgar Enrique Bernal Jáuregui

RADICADO: 54-001-33-40-009-2016-00395-01
DEMANDANTE: GLADYS CECILIA PAEZ DE NAVARRO
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FNPSM.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Procede el Despacho a decidir de plano el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra de la providencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, por medio del cual resolvió no vincular como tercero interesado al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

I. ANTECEDENTES, TRÁMITE PROCESAL Y AUTO APELADO

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del CPACA, la señora GLADYS CECILIA PAEZ DE NAVARRO, por conducto de abogado en ejercicio, formuló demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM, solicitando la nulidad parcial del acto administrativo contemplado en la **Resolución 03965 del 15 de octubre de 2015**, por medio del cual se le reconoció una cesantía Parcial sin reconocerle y pagarle la retroactividad desde el 11 de Abril de 1995, momento de su vinculación a la docencia oficial, pretendiendo a título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación la Cesantía retroactiva debidamente liquidada, pagos de los intereses moratorios y condenar en costa a la entidad demandada. En el mismo escrito, solicita la designación como tercero interesado del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, entidad de orden territorial con autonomía patrimonial y económica.

La demanda fue admitida por el *A quo* mediante auto calendado 31 de octubre de 2016¹, a través del cual el Juez de conocimiento decidió no vincular como tercero interesado al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, considerando lo siguiente:

“Se advierte que del contenido de la demanda se desprende solicitud de vinculación del Departamento Norte de Santander en calidad de tercero interesado sin exponer los motivos en que ella se fundamenta. Ahora bien, el Despacho considera que a pesar de la falta de recopilación de material probatorio, dicha solicitud no tiene vocación de prosperidad habida cuenta que del artículo 56 de la Ley 962 de 2005, se aprecia que el deber de proceder a reconocer pensión de jubilación a los docentes corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la delegación que se hace en la Secretarías de Educación de los entes territoriales certificados, en este caso de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, es decir, que actúa como delegataria, sin que se observe que dicha obligación se haya adscrito al ente territorial”.

El día 31 de enero de 2017, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta profiere auto², mediante el cual, consideró improcedente el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, razón por la cual, da trámite al recurso de apelación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 243 de la Ley 1437 del 2011, concediéndolo en el efecto suspensivo.

¹ Folio 37 del expediente

² Folio 71 del expediente

III. RAZONES DE LA APELACIÓN

La parte recurrente argumenta que los actos administrativos que suscribe el Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, en los que reconoce cesantías y pensiones de conformidad con lo establecido en la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2381 de 2005, de conformidad con el principio de desconcentración administrativa, lo hace en nombre y representación de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM.

A su vez, cita providencia del Consejo de Estado expedida dentro del radicado N° 73001 23 33 000 2013 00410 01 (1075-2014), relacionada con la vinculación de entidad territorial, en la que se expresó: *“(...) no es comprensible que pida su desvinculación con sustento en la razón por la cual lo hizo, como si ello tuviere la entidad de desvirtuar su autoría material. El simple hecho de haber sido el ente territorial Departamento del Tolima – Secretaría de Educación la autoridad que expidió el acto administrativo objeto del debate procesal estructura, per se, la legitimación en la causa por pasiva para exigir su intervención dentro del debate jurídico (...)”*.

Con base en ello, concluye que es necesaria la comparecencia del ente territorial, pues sus intereses se encuentran envueltos en el resultado del proceso, no por la expedición del acto administrativo demandado, sino por la importancia de que conozca la decisión que en el presente juicio pueda adoptarse.

Para resolver se,

IV. CONSIDERA

En primera medida, se estima procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, pues se trata de un auto consagrado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, formulada dentro de la oportunidad prevista en el numeral 2 del artículo 244 ibídem; además, el Despacho es competente para decidir de plano sobre el recurso interpuesto, en anuencia de lo dispuesto por el artículo 125, artículo 243 en concordancia con el artículo 226 del CPACA.

Ahora bien, la cuestión que ocupa la atención del Despacho en esta oportunidad se contrae a establecer si se ajusta a la legalidad, el auto proferido por el Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, mediante el cual declaró no vincular como tercero interesado al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al presente proceso.

Sabido es que en materia Contencioso Administrativa, la intervención de terceros se encuentra regulada en el artículo 224 del CPACA, la cual prevé que desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa, cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvante o impugnadora, litisconsorte o como interviniente *ad excludendum*.

Se desprende de la norma anterior, que en los procesos contenciosos administrativos se permite la intervención de 3 tipos de terceros procesales. 1) Los coadyuvantes o impugnadores, cuya intervención es adhesiva; 2) Los litisconsortes, cuya actuación depende de la intervención litisconsorcial y 3) los intervinientes *ad excludendum*.

Sin perjuicio de la calidad del tercero interesado que se formule, es necesario demostrar dos presupuestos: i) Poseer un interés directo en las resultas del proceso y ii) que se trate de la protección de un derecho eminentemente subjetivo.

En palabras del Consejo de Estado, se entiende que una persona tiene interés directo en las resultas del proceso cuando *"de lo que se decida en la sentencia, lo beneficia o perjudica en el goce y efectividad de sus derechos. El interés en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está determinado por el provecho o por la afectación que causa el acto particular de manera ostensible y cierta, es decir, que no puede ser eventual"*.³

En el presente caso, se advierte que la parte actora es quien pretende la vinculación del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER en calidad de tercero interesado, al argumentar que los intereses de dicho ente territorial se encuentran envueltos en el resultado del proceso, no por la expedición del acto administrativo demandado, sino por la importancia de que conozca la decisión que en el presente juicio pueda adoptarse.

Al respecto, el Despacho considera que si la parte demandante estimaba que la comparecencia del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER resultaba necesaria en el proceso, debió haber instaurado la demanda en contra de dicha entidad a efectos de que se asegurara su comparecencia en el proceso en calidad de demandado, pues la calidad de tercero interesado, en principio, **debe ser invocada por el mismo tercero que pretenda concurrir al proceso**, por tener interés en las resultas del mismo; situación que no se evidencia en el particular, en donde el citado ente territorial no ha solicitado su intervención.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que en los términos del artículo 61 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 227 del CPACA, se debe asegurar la correcta integración del contradictorio, se procederá a determinar si se configuran los presupuestos para que el ente territorial múltiples veces citado concorra en calidad de litisconsorte necesario.

En efecto, el artículo 61 del Código General del Proceso, preceptúa:

"(.) Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de enero 21 de 1971, Exp 1199 y Sección Cuarta, auto del 7 de mayo de 2008, Exp 16847

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio. (...)" (En negrilla y subrayado fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, tenemos que la figura del litisconsorcio necesario tiene lugar cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente (artículo 61 del C.G.P.), lo cual impone que el proceso no pueda adelantarse sin la presencia de dicho litisconsorte, pues su vinculación resulta imprescindible y obligatoria.

Pues bien, al revisar el escrito demandatorio, tenemos que se pretende como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, que se ordene la reliquidación de cesantías y pensión de jubilación reconocida a la parte demandante con la inclusión de la totalidad de los factores salariales.

Sobre la competencia legal para el reconocimiento y pago de dichas prestaciones, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 91 de 1989, dispone lo siguiente:

"Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

(...)

***5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;** pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles".*
(Subraya y resalta la Sala).

Así mismo, el artículo 56 de la Ley 962 del 2005, prevé:

*"ARTÍCULO 56. Racionalización De Trámites En Materia Del Fondo De Prestaciones Sociales Del Magisterio. **Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo,** mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, **el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial"***

En el mismo sentido, el Consejo de Estado⁴ ha dicho sobre la participación del ente territorial en el trámite del reconocimiento pensional de un docente, lo que a continuación se translitera:

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C P Gerardo Arenas Monsalve, providencia del 05 de diciembre de 2013, rad 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12).

" (...) La Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece, en este caso la docente causante de la prestación por sobrevivencia, se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconozca o niegue una prestación social, resolución que con posterioridad debe aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del referido Fondo de Prestaciones. En efecto, no hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989 (...)". (Subraya y resalta la Sala).

De lo anterior se desprende, que es la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM, a quien le corresponde asumir el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, pues el ente territorial, a través de del Secretario de Educación Municipal, solo expide los actos administrativos, mediante los cuales se reconozca o niega una prestación social en virtud de la figura de la delegación administrativa.

En consecuencia, en el caso particular no existe una única relación jurídica sustancial que haga imprescindible la concurrencia del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en calidad de litisconsorte necesario, en tanto que el legitimado para asumir el reconocimiento y pago de la pretensión formulada por la parte actora subyace en la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FNPSM. Adicionalmente, no existe en el plenario solicitud mediante la cual el ente territorial pretenda concurrir como coadyuvante, impugnante o como interviniente *ad excludendum*, pues en todo caso dicha entidad no podría pedir la protección de un derecho subjetivo pensional a su favor, razón por la cual, se confirmará la providencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto se,

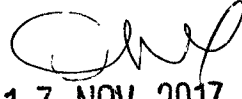
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMASE la providencia de fecha veintiocho (31) de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, por medio del cual resolvió no vincular como tercero interesado al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme el presente proveído, vuelva el proceso al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado-.


17 NOV 2017
Estado No 194